



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veintiocho de julio de dos mil veintitrés

A23-161

REFERENCIA: ordinario laboral - APELACIÓN AUTO
DEMANDANTE: **ARGELIO DE JESUS CALLEJAS VÁSQUEZ**
DEMANDADO: **FUNDACIÓN GRUPO ARGOS**
RADICADO: 05001-31-05-026-2023-00350-01
DECISIÓN: **REVOCA** y en su lugar declara probada excepción previa de prescripción
Link: [23-161 \(026-2023-00350\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandada contra la decisión proferida el 15 de junio de 2023 mediante la cual el Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Medellín declaró NO probada las excepciones previas de cosa juzgada y prescripción.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 25** de discusión, que se adopta como auto, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

- Pretende la parte actora, en síntesis, que tras declararse la existencia de un contrato a término indefinido entre el 14 de febrero de 1998 y septiembre de 2018, que culminó de manera unilateral y sin mediar justa causa, así como la ineficacia de la transacción a través de la cual se feneció el vínculo por mutuo acuerdo, se ordene a la empresa FUNDACIÓN GRUPO ARGOS a REINTEGRARLO, junto con los salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social causados durante su desvinculación, la indexación de las condenas y las costas del proceso.
- Como hechos relevantes respecto del asunto que aquí nos convoca, sostuvo que se está desconociendo el extremo inicial de la relación así como los efectos de la sustitución patronal entre la cementera NARE, donde laboraba desde el 14 de febrero de 1998, con CEMENTOS ARGOS, última que erradamente arguye como fecha inicial del contrato el 1 de marzo de 2007 en condición de operario general. Narra las circunstancias en que suscribió el acuerdo de

transacción, entre ellas que se sintió acorralado, presionado al indicarle que sino firmaba igual terminarían el contrato, pero sin el pago de ninguna indemnización; que no tenía gafas lo que le impedía leer bien; que tampoco entendía el contenido del documento, y que además se desconocieron derechos ciertos e indiscutibles. Que requiere tener acceso a la seguridad social para continuar con tratamientos, pues tiene problemas de salud (fuertes dolores en cadera, cintura y el brazo izquierdo), que es un sujeto de especial protección constitucional y que sus dolencias fueron las que empezaron a generar problemas con los jefes encargados de la planta.

- Luego de admitirse la demanda y surtirse los trámites de notificación, se pronunció la FUNDACION GRUPO ARGOS. Aceptó la existencia del contrato de trabajo, no así el extremo inicial referido, indicando que correspondía al 1 de marzo de 2007 y aclarando que la sustitución patronal operó en el año 2015. Niega ser conocedor de alguna condición particular del estado de salud del actor, que estuviese calificado o la existencia de algún accidente en vigencia del vínculo. Frente a la terminación del contrato de trabajo expuso que fue claro con el personal en cuanto a las reducciones de operación en la planta, generando la opción de terminarlo, tanto al demandante como a otros, a cambio de una bonificación por retiro, sin mediar ningún vicio en su suscripción. Con base en ello formuló como excepción previa la que denominó *cosa juzgada*, además la de prescripción.
- En audiencia celebrada el 15 de junio de 2023 se declaró NO probado dicho medio exceptivo, condenándose en costas al proponente, fijándose como agencias en derecho la suma de un SMLMV. Contra esta determinación la sociedad demandada interpuso y sustentó recurso de reposición y en subsidio apelación, el primero resuelto de manera desfavorable, remitiéndose el expediente para surtirse la alzada.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL DEMANDADO AL FORMULAR LA EXCEPCIÓN

Expresamente indicó que:

PRIMERA. COSA JUZGADA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que indica: “**ARTICULO 32. TRÁMITE DE EXCEPCIONES.** El juez decidirá las excepciones previas en la oportunidad de que trata el artículo 77, numeral 1 de este código. También podrán proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, así como la de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo” me permito proponer como previa la excepción de cosa juzgada teniendo en cuenta la transacción suscrita por las partes el 28 de septiembre de 2018.

Lo anterior teniendo en cuenta que el documento suscrito entre las partes en la fecha indicada fue fruto de su voluntad libre, consciente y espontánea, materializada con plena capacidad de disposición y un conocimiento debidamente informado de los alcances, consecuencias y efectos de lo estipulado y con efectos de cosa juzgada en los términos del artículo 2483 del Código Civil, en concordancia con el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo.

En el acuerdo de transacción se negociaron de manera anticipada los derechos inciertos y discutibles aquí reclamados por el demandante y se estableció que la Fundación reconocería una suma de dinero precisamente para no tener que afrontar en un futuro una acción judicial como la que se ha iniciado. Ante tal situación y teniendo en consideración que la transacción ya hizo tránsito a cosa juzgada, es menester declarar probada la excepción alegada.

En caso de no aceptarse esta excepción como previa se solicita al despacho que se tramite como de mérito y se resuelva en la sentencia.

SEGUNDA. PRESCRIPCIÓN.

De conformidad con lo establecido en los artículos 488 del C. S. del T. y 151 del C. P. del T., las acciones derivadas de las leyes sociales prescriben luego de tres años de haberse hecho exigible el derecho pretendido. Para el caso que nos ocupa debe prosperar esta excepción teniendo en cuenta que el contrato de trabajo terminó el 28 de marzo de 2018 y si bien el auto admisorio es del 7 de marzo del 2019, la notificación a la Compañía se dio apenas el 2 de junio de 2022

El artículo 94 del Código General del Proceso consagra que la presentación de la demanda interrumpe el término de prescripción siempre que el auto admisorio se notifique al demandado dentro del año siguiente y en el presente caso ello no ocurrió así.

En caso de no aceptarse esta excepción como previa se solicita al despacho que se tramite como de mérito y se resuelva en la sentencia.

2.2. ARGUMENTOS DEL JUEZ AL RESOLVER LA EXCEPCIÓN PREVIA

Respecto de la EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, reconoció que un contrato de transacción gozaba de tal efecto, empero, el mismo podía ser avalado judicialmente, especialmente cuando se aducía la inexistencia de un consentimiento libre de vicios, siendo ello lo que precisamente aquí se alegaba (error y fuerza), debiendo verificarse la validez plena del acto jurídico, previo debate probatorio.

Frente a la PRESCRIPCIÓN sostuvo que era factible analizarla como previa cuando no hubiese discusión sobre su exigibilidad, para el caso ello no ocurría, dado que el acto jurídico respecto del cual se edificaba la existencia de un vicio, databa de septiembre de 2018, a partir de ahí el demandante tenía tres años para reclamar. No obstante, indicó que conforme el art. 94 del CGP, tal fenómeno extintivo tenía la vocación de interrumpirse en la medida que se notificara la demanda dentro del año siguiente a su admisión, lo que NO ocurrió, pero por lo que denominó una *no diligencia concurrente* de los sujetos procesales, incluido el despacho antecesor debido a factores como: la pandemia, no concurrencia oportuna de la demandada tras el envío de la citación para notificación personal, no gestión de la parte demandante, silencio del despacho ante solicitud de la

actora pese a no se tutor de la causa (pese a que NO se podía hablar de paternalismos en el derecho al trabajo al descargar obligaciones en el despacho, menos aun sin el proceso en sí mismo tenía un componente adversarial). Lo anterior, en coherencia con la regla de derecho estatuida en la sentencia SL8716 de 2014, según la cual NO podía aplicarse tal consecuencia procesal cuando la notificación no era oportuna por causa imputable al despacho o al demandado, destacando en este aspecto la gestión efectuada por el reclamante dentro del año siguiente a la admisión de la demanda.

Al resolver el recurso de reposición, añadió que la ausencia de acuciosidad que le endilgó al actor, también le faltó a la persona jurídica demandada, ya que dentro del año siguiente el peticionario envió la citación para notificación personal, siendo una causa atribuible a la Fundación Grupo Argos, el NO haber concurrido al despacho oportunamente, pese a recibirla el 27 de febrero de 2020.

De otro lado indicó que NO resultaba factible, en un estado inicial del proceso, resolver los planteamientos que formulaba el recurrente en cuanto a la cosa juzgada, pues de alguna manera ello tenía tintes de prejuzgamiento, menos aun cuando los medios de convicción del demandante, así como su teoría del caso, se edificaban en la práctica de la prueba testimonial, aun no recaudada. Que otra cosa era que, al dictarse sentencia de fondo, resolviese si en efecto se configuraba la cosa juzgada, escenario propicio de cara al derecho a una tutela judicial efectiva, derecho humano de primera generación que NO era factible cercenar, independientemente de que el demandante ganara o perdiera el proceso.

2.3. RECURSO DE APELACIÓN FUNDACIÓN GRUPO ARGOS

En cuanto a la negativa a declarar como previa la excepción de COSA JUZGADA, indicó que, si bien se discutía la eficacia del acto jurídico por un vicio como el error y la fuerza (definidos en los artículos 1513 y 1515 del CC, de los cuales da lectura), lo cierto es que no se debía validar automáticamente la afirmación del demandante en cuanto a la existencia de un vicio, *según el cual le dijeron que si no firmaba la transacción la empresa no tenía otra opción que terminar el contrato sin justa causa, sino examinar un camino medio para garantizar los efectos de una transacción y no afectar los derechos del actor, como lo era analizar la vocación de prosperidad de la súplica de cara a los elementos materiales probatorios allegados, inexistente para el cas.* En este aspecto expuso que de acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia, era factible *poner sobre la mesa un curso de acción que inexorablemente va a suceder, eso no tiene la entidad de viciar el consentimiento.* Al demandante.

Igualmente citó apartes de una providencia relacionada con la finalidad de la transacción, siendo tal impedir a los contratantes, en línea de principio, llevar al órgano judicial su desacuerdo.

Reitera que el propósito de una transacción es zanjar las discusiones y evitar que cualquiera de las dos partes ponga en conocimiento de la jurisdicción, dicha controversia. Que una postura contraria le restaría toda teleología de la figura, y en materia laboral no tendría ninguna *aplicabilidad*, al desconocerse los efectos fundamentales de la misma, pues se estaría sometiendo a la empresa a afrontar todo un proceso, contrario a derecho.

De cara a la PRESCRIPCIÓN considera que los hechos hablaban por si solos, precisamente teniendo en cuenta la acuciosa exposición del despacho en cuanto a las actuaciones procesales surtidas, por cuanto la demanda se radicó en febrero de 2019, la notificación en junio de 2022, por lo que NO se presentó la interrupción consagrada en el art. 94 del CGP, del cual da lectura, operando el fenómeno extintivo al transcurrir más de 3 años, encontrándose prescrita la acción.

Agregó que la parte actora NO cumplió con su deber procesal de notificar la demanda, al margen de la calificación de la negligencia o falta de diligencia de la parte o del despacho, pues NO se podía desconocer los términos jurídicos legalmente instituidos, mucho menos desconocerlos en perjuicio de la convocada a juicio, afectándose la seguridad jurídica del ordenamiento colombiano, pasándose por alto disposiciones legales tanto contenidas en el CST como el CGP.

2.4. ALEGATOS

Ninguna de las partes presentó alegatos.

3. CONSIDERACIONES

En primer lugar, se advierte que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido, toda vez que conforme lo dispone el numeral 3º del artículo 65 del CPT y la SS, es apelable el auto que *decida sobre excepciones previas*, habiéndose formulado por la parte resistente dos de ellas.

Ocupémonos de examinar la denominada ***cosa juzgada***.

Para resolver, debemos tener en cuenta lo normado por el artículo 2469 del Código Civil, el cual define la transacción como “*un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.*” Se trata pues de un modo de extinguir obligaciones en el

que intervienen únicamente las partes, sin intermediación del Estado o de una tercera persona facultada para ello.

Ahora, en la denominada acta de *terminación por mutuo acuerdo y transacción de un contrato de trabajo* visible a folios 25 a 28 del archivo 16 del expediente digital, el 28 de septiembre de 2018, se dejó plasmado un acuerdo de voluntades entre los aquí contendientes, para dar por terminado el vínculo y transar todas las diferencias que pudiesen derivarse de la relación laboral que sostuvieron desde el 1 de marzo de 2007, así:

TERCERO: EL EMPLEADOR y EL EMPLEADO han sostenido conversaciones relativas a materializar la finalización del contrato de trabajo que los vincula, teniendo en consideración que concurre el interés de una y otra para dar por terminado el mismo y como resultado de lo planteado por ambas partes, acuerdan finalizar por mutuo consentimiento el contrato de trabajo que las vincula, de conformidad con el artículo 61, literal b del Código Sustantivo del Trabajo, terminación que se hace efectiva el 28 de septiembre de 2018, así como transigir, con el presente documento, cualquier divergencia actual o futura que pudiera existir derivada de la celebración, ejecución, terminación o cualquier otro aspecto relacionado directa o indirectamente con la relación laboral que se da por terminada y, además, establecer unas obligaciones de no hacer derivadas de la terminación del contrato de trabajo.

CUARTO: EL EMPLEADOR y EL EMPLEADO convienen para los efectos indicados en la presente transacción, que el primero reconocerá al segundo a título de bonificación no salarial una suma única de **SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$7.765.692)** la cual se pagará dentro de los 15 días siguientes a la terminación del contrato de trabajo, suma con la cual se soluciona cualquier discrepancia presente o eventual derivada directa o indirectamente de la celebración, ejecución y/o terminación del contrato de trabajo. Las partes expresamente establecen que la bonificación acá establecida no es constitutiva de salario para ningún efecto.

Como todo contrato, se encuentran plenamente libres las partes para suscribirlo sin necesidad de la intervención de un tercero, aunque en **materia laboral el mismo tiene una limitante únicamente en el objeto**, pues sólo se podrán transar los **derechos inciertos y discutibles de un trabajador**, dado la naturaleza y el atributo de irrenunciabilidad de otros derechos, pues de lo contrario el acuerdo adolecería de un vicio de nulidad.

El contrato de transacción válidamente celebrado (capacidad, consentimiento libre de vicios, objeto y causa lícitos) según los principios generales del derecho, debe tenerse como ley para las partes contratantes, conforme lo estipula el código civil. Quiere decir lo anterior que cuando el pensamiento y el querer de quienes suscriben el acuerdo queda plasmado en el clausulado de un contrato, disposiciones que en todo caso deben ser claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de los contratantes.

El acta aludida, aunque expresamente NO se indica, realmente es la concreción de una transacción, mecanismo de solución de conflictos que está amparado por la fuerza de la cosa juzgada, por lo que, en principio, y en concordancia con la presunción de buena fe que rige los contratos, no puede ponerse en tela de juicio lo acordado, óptica bajo la cual se enerva cualquier litigio que se intente posteriormente a su celebración sobre asuntos que en forma concreta o implícita precavieron las partes.

La cosa juzgada por regla general implica que no es posible someter a un nuevo proceso el caso ya resuelto, decisión que igualmente es vinculante para el órgano jurisdiccional, pues tal atributo limita a la autoridad al no poder alterar los términos de la transacción, garantizando la seguridad jurídica, pues la misma es definitiva e inmutable.

En relación al petitum es importante aclarar que para que haya identidad en éste, el proceso debe versar sobre un objeto, en donde las prestaciones o declaraciones que se reclaman son precisamente los puntos sobre los cuales ya se concilió o transigió.

No obstante, razón le asiste al a quo cuando aduce que la sola existencia del acta en mención NO impide al juez natural de la causa examinar el conflicto que se presenta, ni ciegamente avalar su contenido obviando si es o no jurídicamente válido, menos aun cuando precisamente se discute la existencia de un vicio en el consentimiento al suscribirlo.

Profusa es la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en torno a este tópico, aceptando que figuras como la conciliación y/o transacción, hagan tránsito a cosa juzgada siempre y cuando no estén afectadas por algún vicio en el consentimiento, además su objeto y causa sean lícitos, y NO desconozca derechos mínimos, ciertos e indiscutibles.

Quiere ello decir que si uno de estos tres puntos se discute, NO podrá declararse como una excepción previa, ya que las partes pueden acudir excepcionalmente al proceso ordinario laboral para debatir acuerdos con efectos de cosa juzgada, no para que se vuelvan a estudiar las controversias resueltas por su propia voluntad, sino con el fin de que el juez analice temas relativos a su validez y eficacia, tales como: *i) El cumplimiento de los presupuestos formales, como lo es que sea aprobada por una autoridad competente, ii) La inexistencia de vicios en el consentimiento, iii) Que no se vulneren normas de orden público y iv) Que se respeten los derechos mínimos, irrenunciables, ciertos e indiscutibles del trabajador.* Tal fue el razonamiento de nuestro órgano de cierre en sentencia SL4037-2022, en la que rememoró la SL18096-2016, reiterada en las providencias SL11339-2017, SL8301-2017 y SL8564-2017, oportunidad en la que adujo que, si la parte firmante consideraba que existía un *vicio del consentimiento*, podía acudir ante la jurisdicción

mediante un proceso ordinario de competencia del Juez Laboral, es decir, podía discutir la validez y eficacia de aquel.

El mismo pensamiento se ha plasmado en sentencias como las 79246 y 73860, ambas expedidas en septiembre de 2020, última en la que señaló que *los acuerdos de conciliación deben ser analizados en su contexto, de manera razonable, de ahí que no es dable entenderlos de manera ligera.*

Y es que según lo analizado por la Corte Suprema de Justicia en providencia AL818-2021, radicación 82.432, rememorando apartes de la AL1761-2020, para que sea procedente la aprobación de una transacción, es necesario que se reúnan los siguientes requisitos:

En ese contexto, la Sala considera necesario destacar que existen unos presupuestos cuyo cumplimiento es indispensable para que proceda la aprobación de la transacción, esto es, que: (i) exista entre las partes un derecho litigioso eventual o pendiente de resolver; (ii) **el objeto a negociar no tenga el carácter de un derecho cierto e indiscutible;** (iii) **el acto jurídico sea producto de la voluntad libre de las partes, es decir, exenta de cualquier vicio del consentimiento,** y (iv) lo acordado genere concesiones recíprocas y mutuas para las partes (CSJ AL607-2017), o no sea abusiva o lesiva de los derechos del trabajador.

(Resaltos propios)

Además, en la sentencia CSJ SL3716-2019, se indicó que

Pues bien, el error consiste básicamente en una idea inexacta que se forma un contratante sobre uno de los elementos del contrato, como lo es respecto a la naturaleza del acto, frente a la identidad del objeto, sobre su calidad o en la persona con la que se contrata, tal como lo prevé[n] los artículos 1510 a 1512 del CC; y en relación al dolo, según se desprende del artículo 1515 *ibídem*, radica en el engaño que una de las partes infiere al otro para inducirlo a la celebración del contrato, por lo que para su existencia se requiere de una conducta que intencionalmente provoca o genera una idea errónea, la cual resulta determinante en la emisión de su declaración de voluntad.

Debe recordarse también que los elementos mencionados de afectación de la libre voluntad no se presumen, sino que deben demostrarse plenamente por la parte que aduce los padeció y, una vez acreditados, procede la nulidad declarada en sentencia, en los precisos términos del inciso 1º del artículo 1746 del CC, que da al demandante derecho para ser restituido su contrato al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto nulo.

Así las cosas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1508 a 1516 del CC (algunos citados por el recurrente) el error, la fuerza y el dolo como vicios del consentimiento, capaces de afectar las declaraciones de voluntad, no se presumen, sino que deben acreditarse plenamente en el proceso. Consecuencialmente sólo conservará validez la transacción si evacuada la etapa probatoria NO se acredita el vicio, recayendo sobre las pretensiones enunciadas en el libelo genitor

En otras palabras, si la transacción no adolece de los vicios que se endilgan, podría implicar una renuncia lícita a hacer valer el tipo de reclamos que aquí se ventilan.

En este orden de ideas, atendiendo a lo dispuesto en el precedente en cita, habrá de CONFIRMARSE la decisión objeto del recurso de alzada en este punto.

Procedemos ahora a examinar la excepción de **prescripción**.

Tenemos entonces que, si bien el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social consagra la aplicación analógica del Código de Procedimiento Civil hoy Código General del Proceso, lo cierto es que en el presente caso no es pertinente efectuar algún tipo de remisión, por cuando el art. 32 de nuestro estatuto, sin asomo de duda, regula el trámite que debe surtirse cuando se propone una excepción.

La norma, modificada por el art. 1 de la Ley 1149 de 2007, es del siguiente tenor:

El juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. **También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión**, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Si el demandante tuviere que contraprobar deberá presentar las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo.
Las excepciones de mérito serán decididas en la sentencia. (Resaltos propios)

La disposición es de tal claridad que no admite duda sobre los eventos en los cuales es viable resolver en tal audiencia la excepción de prescripción que o bien se propone como previa o bien se resuelve como de mérito por tener el carácter de mixta, supeditando la posibilidad del fallador de efectuar el análisis pertinente de manera inicial, a la inexistencia de discusión, entre otras, en cuando a la fecha de exigibilidad de la pretensión, condicionamiento que sí se satisface en este caso. Veamos porqué:

A voces del recurrente debe declararse probada la excepción previa de prescripción dado que en parte alguna se discute que el acto jurídico cuya validez se cuestiona, se emitió el 28 de septiembre de 2018, y que la notificación personal se surtió el 2 de junio de 2022 (fl. 1 archivo 14), sin que la presentación de la demanda, radicada en febrero de 2019, hubiese tenido la vocación de interrumpir el término trienal conforme lo previsto en el art. 94 del CGP, cuyo tenor es:

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado.

Frente a ello discrepa el a quo argumentando que existe, en los términos reseñados en el acápite 2.2., una *no diligencia concurrente* de los sujetos procesales, reseñando lo sucedido en el trámite del proceso, así:

- ✓ 28 de septiembre de 2018: suscripción transacción.
- ✓ 19 de febrero de 2019: radicación demanda
- ✓ 4 de marzo de 2019: auto admite demanda
- ✓ 24 de enero de 2020: auto requiere a la parte para que impulse el proceso
- ✓ 4 marzo de 2020: memorial con entrega de citación para notificación personal al demandado el 27 de febrero de 2020.
- ✓ Agosto de 2020: memorial actor- solicitud indicaciones de cómo proceder
- ✓ 26 de marzo de 2021: memorial actor- solicitud indicaciones de cómo proceder
- ✓ Septiembre de 2021: memorial actor -solicitud celeridad
- ✓ 2 de junio de 2022: notificación personal Fundación Grupo ARGOS

Desde éste esquema el juzgador NO opta por abstenerse de decidir cómo previa la excepción alertando una eventual discusión de términos, sino que la resuelve declarando que el fenómeno NO obró. Intrínsecamente estaría reconociendo que configuran los presupuestos procesales para examinar de fondo el medio exceptivo que se propone. Y es ahí cuando destaca que NO sólo podría reprocharse la pasividad del proponente de la acción, sino además su contendor al NO acudir al despacho ante ese primer llamado, aunado al que podría calificarse como silencio del despacho.

Una mirada ligera del asunto haría pensar que en el *sub examine* se plantean varias posibilidades sobre la operancia y la manera de contabilizar el término extintivo pues, aunque NO existe discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión, si parece controvertirse la fecha de interrupción o suspensión del término de prescripción, diversidad que en un principio cuestiona a esta Magistratura en cuanto a si el asunto se debe despachar en esta oportunidad procesal, es decir, que tal excepción se examine como previa, o si por el contrario la discusión debe conllevar a que el fallador la resuelva de mérito, claro está, sin miramientos a la razonabilidad o prosperidad de las súplicas aquí impetradas.

Y es que la Corte Constitucional en sentencia C-820 de 2011, cuando examinó la exequibilidad de la norma antes citada, recordó que la excepción de prescripción tenía naturaleza objetiva, toda vez que su acreditación se producía mediante la contabilización del transcurso del tiempo, para éste caso, al margen de la intención, el ánimo o la razón por la cual el acreedor permaneció inactivo. Precisa tal órgano que su declaratoria anticipada, en la primera audiencia sólo era posible cuando existía certeza sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión, o de su interrupción o suspensión. De manera que si se presentaba alguna discusión en torno a estos tópicos su decisión se diferiría en la sentencia.

Así las cosas, y acogiendo el criterio aludido, considera esta Magistratura que la discusión que se sostenga a favor o en contra de la declaratoria de prosperidad de este medio exceptivo, se debe cimentar en posturas razonables, admisibles, que tengan fundamento bien en la ley o incluso en la jurisprudencia. No se trata simplemente de discernir de una intelección para poner en marcha todo el aparato jurisdiccional en busca de la declaratoria de un derecho, que en etapa temprana se advierte prescrito. En otras palabras, para que pueda hablarse de discusión de la fecha de interrupción o suspensión del término de prescripción, tiene que invocarse una tesis que tienda a cuestionar con argumentos de peso, la contabilización que para el caso efectúa el a quo.

Y es ajusto ahí cuando para este caso, la balanza se inclina a favor de los intereses del recurrente al resaltar que parte actora NO cumplió con su deber procesal de notificar la demanda, sin encontrar justificable su omisión.

Retomando nuevamente la reseña efectuada por el juez en cuanto a las actuaciones surtidas al interior del proceso, considera la Sala que el despacho NO está facultado para instruir a la parte en torno a cómo efectuar una notificación, menos aun si para las datas en que elevó aquellas solicitudes, ya había sido expedido el Decreto 806 de 2020.

Acudamos inicialmente a lo normado en el artículo 8º de la disposición en comento, vigente para la época, cuyo tenor era:

“Notificaciones Personales. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el **envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en se que se realice la notificación**, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos.

Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.

(Negrillas fuera de texto).

Nótese como se sumó a la conocida notificación personal de que trata el art. 41 del CPT y las SS, la posibilidad de notificar electrónicamente al demandado, evento en el cual, por tratarse de una

persona jurídica, bastaba simplemente con demostrarse el envío del mensaje de datos al e-mail registrado para efecto de notificaciones ante el certificado de Existencia y Representación de la Cámara de Comercio.

Y es que la teleología de la utilización de las tecnologías de la información o medios digitales, NO es otra diferente a la de implementación de una herramienta que facilite y agilice el acceso a la justicia, que en su momento sirvió para proteger tanto a servidores judiciales como a los usuarios de los efectos nocivos de la pandemia, evitando desplazamientos innecesarios, pero garantizando la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas. Se advertía para entonces que la codificación existente presentaba limitaciones, como el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que NO regulaba lo relacionado con las notificaciones electrónicas, ni el envío y recibo de documentos electrónicos. Consecuencialmente se sorteó el incumplimiento de formalidades que por regla general se efectuaban de manera presencial, materializando el acceso a un servicio público como es la administración de justicia, garantizándose además el derecho de contradicción.

Ahora, conocedora es la Sala de aquella posición de la Corte Suprema de Justicia según la cual no deben aplicarse estas fatales consecuencias cuando la notificación tardía ha obedecido a la conducta de la contraparte o a la culpa de los funcionarios y empleados judiciales encargados de velar por que ella se practique.

Pero aun así bajo esa óptica, en el contexto descrito, NO resultan de acogida los planteamientos del a quo, pues la inactividad del peticionario, de cara al proceso, es evidente. Sólo comenzó a cumplir con sus cargas procesales cuando el despacho lo requirió ad portas del cumplirse el año de admitida la demanda, y si bien logró enviar una citación a la parte resistente del juicio, tan sólo fue aproximadamente 15 días antes al cierre de los despachos judiciales a nivel nacional generado por la pandemia, situación imprevisible, pero remediada con la emisión del Decreto 806 de 2020, que facilitó de manera muy relevante el trámite de notificaciones, transcurriendo casi dos años sin utilizarse dicha herramienta.

Quiere esto decir que la notificación tardía únicamente tiene como causa la omisión en el cumplimiento de las cargas atribuibles a la parte actora. Consecuencialmente la demanda NO tuvo la virtualidad de interrumpir el término trienal de que trata el art. 151 del CPL, habiéndose surtido la notificación a la Fundación Grupo ARGOS en junio de 2022, momento para el cual ya había prescrito el derecho, exigible desde septiembre de 2018.

En consecuencia, atendiendo los razonamientos que preceden, se **REVOCARÁ** la decisión objeto del recurso de alzada y en su lugar se declarará probada la excepción de prescripción, respecto de las pretensiones aquí incoadas, ordenándose la terminación del proceso, así como su archivo.

Sin costas en ninguna instancia.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE**

PRIMERO: REVOCA la decisión proferida el 15 de junio de 2023 por el Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Medellín y en su lugar se declara probada la excepción previa de prescripción y la terminación del proceso ordinario laboral promovido por el señor **ARGELIO DE JESUS CALLEJAS VÁSQUEZ** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 3.553.766 contra la **FUNDACIÓN GRUPO ARGOS**, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: sin costas en ninguna instancia.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por
ESTADOS No. 130 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 31 DE JULIO DE 2023

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>